

# ¿Anticorrupción o purga?



JHONN ZERPA / AFP

La crisis sociopolítica en Venezuela se complejiza. Por una parte, encontramos a las principales figuras del Gobierno nacional persiguiéndose entre sí por aparentes casos de corrupción, y por el otro tenemos a la oposición imbuida entre las negociaciones y el desacuerdo reiterado en torno a la definición del liderazgo opositor. Entretanto, las necesidades de la sociedad venezolana se acrecientan y grupos vulnerables organizados reclaman por sus derechos

El mes de marzo concluye con una de las noticias menos esperada de todas: desde el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro comienza una lucha contra la corrupción. Lo insólito es que los investigados son funcionarios públicos, empresarios y testaferros vinculados al sector oficial. El gran herido y caído en desgracia ha sido Tareck El Aissami, quién fungía como ministro de Petróleo y tuvo cargos importantes desde la gestión de Hugo Chávez.

Muchos se preguntan si las acciones que se han emprendido en contra de los implicados en casos de corrupción, es una lucha genuina por depurar la administración pública o una purga interna entre facciones del chavismo-madurismo. Tampoco podemos ignorar que, desde el extranjero, estas acciones han sido vistas con buenos ojos; recordemos que el gobierno americano ha sido el primero en celebrar esta lucha emprendida por el gobierno de Maduro.

La imagen de algunos acusados con bragas naranjas y entrando a la audiencia de presentación, le ha dado

la vuelta al mundo. Pudiera ser algo normal, pero al ver en profundidad los nombres y la trama que día a día se va develando, descubrimos cómo piezas del Gobierno van cayendo por cargos de corrupción, apropiación del patrimonio público, asociación para delinquir, legitimación de capitales, traición a la patria, entre otros delitos. El fiscal Tarek William Saab, comparó toda la situación con lo que ocurre en una trama de televisión, incluso se atrevió a decir que “se dejaron llevar por lo que vieron en la novela”, refiriéndose a los implicados.

La lista de detenidos hasta el momento supera los veinticinco nombres, destacándose el del diputado Hugbel Roa, el superintendente nacional de criptoactivos Joselit Ramírez, el vicepresidente de Pdvsa Antonio José Pérez y el empresario Rafael Perdomo. Tampoco se puede pasar por alto que, en medio de esta *purga*, también fue detenido el alcalde de Las Tejerías en el estado Aragua, Pedro Hernández, a quien se le acusa de terrorismo y extorsión, por sus vínculos con Carlos Gómez, alias *El Conejo*.

Otro nombre que vale la pena destacar, en medio de estas detenciones, es el de José Márquez, juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo. Dicho funcionario ha llevado un número importante de casos de personas vinculadas a la oposición, lo que pone en entredicho la imparcialidad del magistrado.

Toda esta trama ha develado que el desfalco a Pdvsa es de al menos tres mil millones de dólares, aunque el diputado de la Asamblea Nacional Hermann Escarrá llegó a afirmar que el dinero robado supera los veinte mil millones de dólares. Sin importar la cantidad que haya sido expoliada, es evidente que una correcta distribución de esos recursos, sin duda, hubiera ayudado a millones de familias que están sufriendo las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

Entretanto, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional han comenzado a señalarse entre sí. Por un lado, Rafael Ramírez y Andrés Izarra han dicho en las redes y algunos medios de comunicación que toda la situación se originó por el poder que comenzaba a acaparar El Aissami y su círculo más cercano. Del otro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez señalan a Ramírez de ser el gran responsable de la pérdida de Pdvs, tratando de minimizar la gravedad de los daños, afirmando que *la corrupción en la cuarta era peor*.

Todavía nos corresponde esperar para conocer las consecuencias que tendrá toda esta *cruzada anticorrupción* emprendida desde el Gobierno nacional. También para saber cuáles serán las próximas fichas en caer y quienes podrán sobrevivir a una pugna interna que parece no tener retorno entre las filas del oficialismo.

### NEGOCIACIONES Y SANCIONES

La comunidad internacional sigue apostando por un diálogo entre sectores de la oposición y el Gobierno nacional, para destrabar el juego político y atender las necesidades más importantes de la población.

La Unión Europea, Colombia y México han mantenido contacto con los diferentes actores para contribuir a un acercamiento y posible reinicio de las negociaciones, congeladas desde noviembre de 2022. Incluso el papa Francisco manifestó en una entrevista que el diálogo en Venezuela lo veía inevitable, ya que *la realidad los obligará a sentarse*.

Mientras unos apuestan a destrabar el juego político, buscando puntos de encuentro entre los sectores implicados, otros siguen clamando por incrementar las sanciones en contra del país. Uno de ellos es Leopoldo López quien, desde diferentes tribunas internacionales, ha manifestado que la única manera de que el *régimen de Maduro caiga*, es con mayor presión de los gobiernos aliados al *desaparecido interinato*.

Dicha propuesta ha generado el rechazo de varios líderes de la oposición, quienes consideran que esa estrategia no ha sido efectiva y, por



STEBAN VEGA LA ROTA / PUBLICACIONES SEMANA

el contrario, ha logrado atornillar aún más al actual Gobierno en el poder. Una de las voces más críticas a la iniciativa presentada por López ha sido la de Henrique Capriles, quien considera que es momento de buscar *otros mecanismos políticos más efectivos*, que eviten mayores sufrimientos a la gente.

Otras voces críticas han venido del mundo universitario. Un ejemplo de eso ha sido lo afirmado por Arturo Peraza, nuevo rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien considera que la propuesta de López es *seguir matando a este sufrido pueblo*, sin negar que el actual régimen es una *cleptocracia*.

Todo parece indicar que en la oposición las posiciones sobre el diálogo y las sanciones no están consensuadas y todavía no habrán puntos de encuentro para buscar políticas de cara al proceso electoral de 2024. Entretanto, el Gobierno resiste y podría soportar lo que se avecina, ya que no siente la amenaza de un rival fuerte que le dispute realmente el poder.

### LOS YUKPAS SE FUERON A CARACAS

Desde hace años el Gobierno tiene una deuda con los pueblos indígenas, a pesar de tener un Ministerio para atender a esta población y, cada cierto tiempo, elevar las banderas anticolonialistas, las acciones concretas en favor de los grupos vulnerables escasean.

Muchos medios de comunicación, periodistas especializados en el área, organizaciones y defensores de derechos humanos, han denunciado las calamidades que viven miles de indígenas a lo ancho y largo del territorio. Sufren el desplazamiento forzado de sus tierras, trata de personas, enfermedades graves y abandono total por parte de las autoridades.

Ante esta situación la etnia Yukpa organizada, radicada en Machiques de Perijá en el estado Zulia, se movilizó hacia Caracas para exigirle al Gobierno asistencia social y denunciar la corrupción que existe en el Ministerio de Pueblos Indígenas con los proyectos de desarrollo alrededor de sus tierras.

En su trayecto a Caracas fueron detenidos en el estado Carabobo, a la altura de Mariara, por los cuerpos de seguridad quienes argumentaron que esa movilización no estaba autorizada para trasladarse a la capital. Esta situación originó que los Yukpas se enfrentaran a los funcionarios uniformados con palos, piedras y flechas; la indignación pudo más que el respeto a las autoridades.

Ante estos hechos, no hubo pronunciamiento oficial por parte del Ministerio, tampoco se ha hecho mención, desde hace mucho tiempo, a la situación de miles de indígenas. Tendremos que esperar que comience la temporada electoral para escuchar alguna mención a los derechos de los pueblos originarios.